

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ORDEN 2247/2018, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (B.O.C.M. Nº 295, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018), PARA EL ACCESO AL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS, ESPECIALIDAD DE CONSUMO, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID



PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST

MADRID, 28 DE NOVIEMBRE DE 2020

ORDEN 2247/2018, DE 20 NOVIEMBRE (BOCM 11/12/2018)

CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS, ESPECIALIDAD DE CONSUMO, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. ¿Cuántas Disposiciones Finales tiene la Constitución de 1978?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 3.

2. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser:

- a) Aprobada por la comunidad afectada, mediante ley.
- b) Aprobada por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
- c) Aprobada por la comunidad autónoma afectada, mediante ley orgánica.
- d) Aprobada por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.

3. El número de diputados que conforma la Asamblea de la Comunidad de Madrid es variable, determinándose la cifra para cada legislatura en virtud de la siguiente regla:

- a) Un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
- b) Un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 20.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
- c) Un diputado por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
- d) Un diputado por cada 40.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.

4. La responsabilidad penal del Presidente de la Comunidad de Madrid será exigible:

- a) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- b) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- c) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.
- d) Ante la Jurisdicción competente, según los casos.

5. Los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid, se extinguen:

- a) Por Decreto del Consejo de Gobierno.
- b) Por Ley de la Asamblea.
- c) Por Orden del Consejero correspondiente.
- d) Por Ley Orgánica.

6. La presidencia del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores, se ejerce:

- a) De forma rotatoria, por grupos predeterminados de tres Estados miembros, durante un periodo de 18 meses.
- b) Cada 6 meses según un orden fijado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
- c) Cada 12 meses según un orden fijado por unanimidad del Consejo.
- d) Cada 6 meses según un orden fijado por 3/5 votos del Consejo.

7. Conforme al principio de primacía:

- a) El derecho comunitario se aplica sobre las normas de derecho interno, sea cual sea el rango que éstas ocupen en la jerarquía interna de las normas.
- b) El derecho comunitario no deroga la norma de derecho interno, a no ser que se prevea expresamente.
- c) El derecho comunitario puede anular la norma de derecho interno, si se dan ciertas condiciones especiales.
- d) Todas son correctas.

8. ¿Quién podrá planificar la actividad económica general, con atención a las especiales necesidades colectivas, de conformidad con el art. 131,1 de la Constitución?:

- a) Las Comunidades Autónomas y las Administraciones Territoriales.
- b) El Gobierno mediante Ley Orgánica.
- c) Las Cortes Generales en coordinación con las Comunidades Autónomas, mediante sus respectivas leyes.
- d) El Estado mediante una Ley.

9. El Código Civil establece las fuentes del Derecho en su artículo:

- a) No las establece en ningún artículo.
- b) El artículo 1.
- c) El artículo 18.
- d) El artículo 35.

10. En la Constitución Española de 1978, la defensa de los consumidores y usuarios se regula:

- a) En el Título Primero, Capítulo Primero, artículo 50.
- b) En el Título Primero, Capítulo II, Derechos y Libertades, artículo 51.
- c) En el Título Primero, Capítulo III, artículo 51.
- d) En el Título VII, Economía y Hacienda.

11. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios al amparo del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

- a) La protección en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
- b) La indemnización de los daños, pero no así la reparación del perjuicio sufrido.
- c) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de igualdad y necesidad.

d) Todas son correctas.

12. De acuerdo con la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, son derechos básicos de los consumidores:

a) La protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquélla de forma integral, excluyendo por tanto los riesgos que amenacen al medio ambiente.

b) La protección de sus intereses particulares.

c) La información correcta sobre los diferentes bienes, productos y servicios.

d) La audiencia en consulta y la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones específicas que les afecten exclusivamente.

13. El Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, se encuentra regulado en el Decreto por el que se aprueba Reglamento de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid:

a) En el Título II, Capítulo I.

b) En el Título III, Capítulo I.

c) En el Título IV, Capítulo II.

d) Ninguna es correcta.

14. Señale la opción incorrecta. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), hoy AESAN, tiene como objetivos generales:

a) Promover la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de la salud pública.

b) Ofrecer garantías e información subjetiva a los consumidores y agentes económicos del sector comercial agroalimentario español.

c) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición.

d) En especial la prevención de la obesidad.

15. Señale la opción incorrecta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se constituye como punto nacional de contacto de las siguientes redes de alerta:

- a) Sistema de Información General al Consumidor (SIGC).
- b) Red de Alerta Alimentaria de la Unión Europea (RASFF).
- c) Red de alerta de la OMS y la FAO (INFOSAN).
- d) Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

16. El Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid:

- a) Es un órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de sus organizaciones.
- b) Está integrado por el Ministro y los Consejeros competentes en la materia de las diferentes Comunidades Autónomas.
- c) Actúa como órgano de información, consulta y asesoramiento en materia de ordenación del consumo.
- d) Un órgano que será oído en audiencia, con carácter vinculante en el proceso de elaboración de las disposiciones de carácter general.

17. Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en los municipios:

- a) No se suprime la defensa de usuarios y consumidores del listado de materias de competencia propia municipal que contiene el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- b) En materia de defensa de los consumidores usuarios, se podrán ejercer competencias distintas de las propias y las delegadas siempre que cumplan los requisitos establecidos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- c) No podrán ejercer competencias delegadas, aunque éstas cumplan los requisitos establecidos en los artículos 27 y 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- d) Todas las anteriores son falsas.

18. ¿Qué organismo tiene competencia para regular, a nivel europeo, sobre la legislación de los consumidores y usuarios?:

- a) El Parlamento Europeo a través del procedimiento de cooperación.

- b) El Parlamento Europeo a través del procedimiento legislativo ordinario.
- c) El Parlamento Europeo previo informe de la comisión europea.
- d) La Comisión Europea.

19. El Centro Europeo del Consumidor ofrece los siguientes servicios:

- a) Información, asesoría, gestión de reclamaciones y publicaciones.
- b) Información, asesoría, gestión de litigios, publicaciones, formación y arbitraje.
- c) Información, asesoría, gestión de reclamaciones, publicaciones y formación.
- d) Información, asesoría, gestión de reclamaciones, redacción de informes y formación.

20. La libre circulación de mercancías en la UE está garantizada mediante:

- a) La eliminación de los derechos de aduana y las restricciones cuantitativas y el establecimiento de un arancel aduanero común.
- b) La eliminación de los derechos de aduana y las restricciones cuantitativas y cualitativas así como la prohibición de medidas de efecto equivalente.
- c) La eliminación de los derechos de aduana y remoción de obstáculos que dificultan esa libre circulación.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. La dotación financiera para la ejecución del Programa Plurianual de Consumidores en el período 2014-2020, conforme al Reglamento (UE) 254/2014, de 26 de febrero de 2014 es de:

- a) 198 829 000 EUR.
- b) 188 829 000 EUR.
- c) 178 829 000 EUR.
- d) 168 829 000 EUR.

22. El centro europeo del consumidor, actualmente, está integrado por:

- a) 28 centros europeos de consumidores de cada uno de los 28 Estados Miembros de la UE única y exclusivamente.
- b) 27 centros europeos de consumidores de cada uno de los 27 Estados Miembros de la UE única y exclusivamente.
- c) 30 centros europeos de consumidores, uno de cada uno de los 28 Estados Miembros de la UE, más Noruega e Islandia.
- d) 30 centros europeos de consumidores, uno de cada uno de los 30 Estados Miembros de la UE.

23. Señale la opción incorrecta. En los contratos del Sector Público, podrán incluirse cualesquier tipo de pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios a:

- a) El interés público.
- b) El ordenamiento jurídico.
- c) Los principios de buena administración.
- d) Los usos y costumbres.

24. El Capítulo II del Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, determina que los sistemas sobre la evaluación del desempeño se adecuarán a los siguientes criterios, sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos, de:

- a) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
- b) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
- c) Seguridad jurídica, celeridad y descentralización
- d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad y eficiencia.

25. Señale la opción incorrecta. La Ley 9/1990, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece respecto a las competencias de la Consejería de Hacienda, como órgano superior de la Administración en esta materia, que le corresponde:



Comunidad
de Madrid

- a) Ejercer la superior autoridad sobre la ordenación de los pagos y su efectiva realización.
- b) La administración de la Comunidad.
- c) La aprobación del proyecto de Presupuesto de la Comunidad y su remisión a la Asamblea.
- d) Dirigir la ejecución de la política financiera.

26. A tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá contener (señale la incorrecta):

- a) El texto íntegro del procedimiento.
- b) La indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- c) La expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial.
- d) El plazo de interposición de los recursos que procedan.

27. El artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, de acuerdo con el principio de:

- a) Simplificación administrativa.
- b) Celeridad.
- c) Agregación ordenada.
- d) Homogeneidad administrativa.

28. Señale la opción incorrecta. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 89, establece que el órgano instructor puede resolver la finalización del procedimiento sin necesidad de formular propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando los hechos no resulten acreditados.
- b) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la sanción.



c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables.

29. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

a) Pasados seis meses desde el inicio del procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

b) Pasado un año desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

c) Pasados 6 meses desde el inicio del procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

30. Según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza:

a) Única y exclusivamente en el mismo formato a partir del que se originó el documento.

b) En el mismo formato a partir del que se originó el documento o en cualquier formato que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

c) En el formato que decidan los particulares.

d) a y c son correctas.

31. Los responsables y encargados del tratamiento de datos deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:

a) Las entidades que exploten redes y presenten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, en todo caso.

- b) Las federaciones deportivas cuando traten datos de personas mayores de edad.
- c) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
- d) Las Universidades Públicas, no así las Privadas.

32. No es un fin del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Promover la transparencia de la actividad pública.
- b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
- c) Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información privada.
- d) Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

33. La igualdad entre hombres y mujeres se encuentra regulada en nuestro Estado por:

- a) La Ley Orgánica 7/2003, de 2 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- b) La Ley 7/2003, de 2 de marzo, reguladora del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
- c) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- d) La Ley 3/2007, de 22 de marzo, reguladora del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

34. Señale cual es la opción incorrecta. Quedan exceptuados de la indicación del precio por unidad de medida al amparo del Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre:

- a) Los productos que se comercializan en cantidades inferiores a 25 g o ml.
- b) Los productos de diferente naturaleza que se vendan en un mismo envase y no se comercialicen individualmente productos iguales a los que lo forman.
- c) Los productos que se comercialicen mediante venta automática.
- d) Los vinos de mesa con indicación geográfica y los vinos con denominación de origen.

35. Según el Decreto 21/2002 de 24 de enero por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, los ciudadanos tienen derecho a presentar en cualquier registro de la Administración de la Comunidad de Madrid, solicitudes, escritos, comunicaciones y documentación complementaria que acompañen:

- a) Y que dirijan a las Administraciones públicas ya sean de ámbito estatal, autonómico o local y a los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de las mismas.
- b) Y que dirijan a las Administraciones públicas de ámbito, autonómico o local y a los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de las mismas.
- c) Y que sean dirigidos únicamente a la Administración de la Comunidad de Madrid
- d) Y que sean dirigidos únicamente a la Administración de la Comunidad de Madrid y las administraciones locales pero sólo atendiendo a un requerimiento previo de éstas.

36. La Comunidad de Madrid propiciará la creación, en su territorio, de una red de información automatizada de:

- a) Los accidentes ocurridos en que estuvieran implicados productos de consumo.
- b) Los accidentes domésticos en que estuvieran implicados productos de consumo únicamente.
- c) Los accidentes ocurridos en el ámbito doméstico y en actividades de ocio así como los accidentes laborales en que estuvieran implicados productos de consumo.
- d) Los accidentes ocurridos en el ámbito doméstico y en actividades de ocio en que estuvieran implicados productos de consumo, quedando excluidos del sistema los accidentes de tráfico y los accidentes laborales.

37. El Centro de Información y Documentación del Consumo (CIDOC) se encarga de elaborar y difundir información:

- a) Jurídica, incluyendo única y exclusivamente tanto la legislación como la jurisprudencia en materia de arbitraje de consumo.
- b) Bibliográfica, en el que están incluidas las monografías, artículos y revistas que se reciben en el centro.
- c) De las organizaciones empresariales y de consumo nacionales y extranjeras.



d) Científica, en la que están incluidos los resultados de los ensayos realizados como consecuencia de las tomas de muestras.

38. Al amparo del art 20 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la duración de los procedimientos de mediación será:

a) Máximo de 6 meses.

b) Máximo de 90 días.

c) Máximo de 60 días.

d) Lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones.

39. Según la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, el laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado la acción de anulación. No obstante, en ese caso, el ejecutado podrá solicitar al tribunal competente la suspensión de la ejecución:

a) Siempre que la cuantía sea superior a 300 euros.

b) Siempre que la cuantía sea superior a 1000 euros.

c) Siempre que la cuantía sea superior a 3000 euros.

d) Siempre que ofrezca caución por el valor de la condena, más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo.

40. Cuando exista causa suficiente, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo acordará la inadmisión de la solicitud de arbitraje, ordenando su notificación al reclamante, siendo el máximo plazo legalmente establecido para dictar resolución:

a) 21 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente de la solicitud o su subsanación.

b) 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente de la solicitud o su subsanación.

c) 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente de la solicitud o su subsanación.

d) 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente de la solicitud o su subsanación.



41. Según el art 18 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, las entidades de resolución alternativa deberán establecer en su estatuto o reglamento las causas por las que se puede inadmitir a trámite una reclamación. ¿Cuál de estos supuestos no es correcto?:

- a) Si el consumidor no se hubiera puesto previamente en contacto con el empresario para tratar de resolver el asunto o no acreditara haber intentado la comunicación con este.
- b) Si la reclamación resultare manifiestamente infundada o no se apreciara afectación de los derechos y legítimos intereses del consumidor.
- c) Si el contenido de la reclamación fuera vejatorio.
- d) Si el consumidor presentara ante la entidad de resolución, alternativa a la reclamación antes de que transcurra un año desde la interposición de la misma ante el empresario reclamado o su servicio de atención al cliente.

42. En una acción de cesación conforme al artículo 53 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, podrá acumularse siempre que se solicite:

- a) La de nulidad y anulabilidad únicamente.
- b) La de nulidad y anulabilidad, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, exclusivamente.
- c) La de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas.
- d) No. No es posible la acumulación de otras acciones según este artículo.

43. No se reconoce la legitimidad activa para las acciones de cesación, a las siguientes entidades conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias:

- a) Al Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
- b) A las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta norma o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
- c) Al Ministerio Fiscal.
- d) A la Abogacía General del Estado.

44. Señale cuál de los siguientes establecimientos tienen obligación de tener hojas de reclamaciones en materia de consumo, al no contar con su propio modelo específico:

- a) Sector turístico (hoteles, bares, cafeterías, etc. y agencias de viajes).
- b) Sector sanitario (centros, servicios y establecimientos, incluidos médicos especialistas, clínicas dentales, centros de análisis clínicos, hospitales privados, centros de rehabilitación, farmacias, etc.).
- c) Sector de servicios sociales (Residencias de la Tercera edad, Centros de día, Centros de acogida, Centros ocupacionales, etc.).
- d) Sector educativo. Centros de enseñanza no reglada.

45. En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Ley 1/2007, 16 de noviembre, la pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislación aplicable, será por un período:

- a) No inferior a 5 años.
- b) No inferior a 4 años.
- c) No inferior a 3 años.
- d) No inferior a 2 años.

46. De acuerdo con la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores, las actuaciones de inspección y control se llevarán a cabo preferentemente sobre aquellos productos, bienes y servicios que afecten a un colectivo de especial protección, especialmente:



- a) Las organizaciones sindicales.
- b) Los residentes de entidades locales que carezcan de medios.
- c) Los inmigrantes.
- d) Los colectivos LGTBI.

47. Si durante la inspección de consumo se detectasen situaciones o hechos constitutivos que no alcancen a la tipificación de infracción leve, se podrá requerir, que se subsanen los mismos:

- a) En el plazo que se conceda al efecto, que como máximo será de 10 días.
- b) En el plazo que se conceda al efecto, que como mínimo será de 10 días.
- c) En el plazo que se conceda al efecto, que como máximo será de 7 días.
- d) En el plazo que se conceda al efecto, que como mínimo será de 7 días.

48. Señale la opción incorrecta respecto a los códigos de buenas prácticas en la Comunidad de Madrid:

- a) El Consejo de Consumo colaborará en su elaboración, en los de ámbito autonómico, e informará los que tengan carácter municipal.
- b) Tendrán carácter voluntario para los empresarios y serán independientes de las actividades de inspección que desarrollen las Administraciones Públicas.
- c) Regularán el plazo de vigencia y revisión que se efectuará, a los 4 años de su aprobación y siempre que se produzca algún cambio normativo que les afecte.
- d) Se podrá solicitar al Consejo de Consumo, participar en su elaboración y aprobación, o solo en su aprobación en la materia de protección al consumidor, incluyendo en materia alimentaria.

49. En relación a la toma de muestras ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?:

- a) Se faculta a la toma de un único ejemplar de muestra en los productos y bienes cuyos ensayos requieran cortos periodos de tiempo.
- b) Se faculta a la toma de un único ejemplar de muestra en los productos y bienes que estén sometidos a certificación.



Comunidad
de Madrid

c) Se regula en el Real Decreto 1945/1993 de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

d) Se efectuarán por duplicado.

50. Según el artículo 42 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid las medidas provisionales no podrán consistir en:

a) La suspensión temporal en cualquier fase de la distribución de un producto, para garantizar la salud y seguridad.

b) la suspensión temporal de la prestación de servicios para garantizar la salud y seguridad.

c) La imposición de condiciones previas en cualquier fase de la comercialización de productos, bienes y servicios, con el fin de que se subsanen las deficiencias detectadas.

d) La aplicación de la sanción pecuniaria.

51. En relación a la norma general de seguridad de productos. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto a las acciones y deberes de sus intervinientes?:

a) Los productores deben informar a los consumidores de los riesgos que no sean inmediatamente perceptibles sin avisos adecuados y que sean susceptibles de provenir de un uso normal o previsible de los productos

b) Los distribuidores mantendrán y proporcionarán, durante 3 años después de haber agotado las existencias de los productos, la documentación necesaria para averiguar el origen de los mismos.

c) La Administración pública puede limitarse a advertir de la inobservancia del deber y a requerir su cumplimiento aunque en algunas circunstancias puede adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la salud de las personas.

d) Cuando la Administración pública decida la retirada o recuperación de los productos inseguros asumirá, como una ejecución subsidiaria, las actuaciones para conseguir efectivamente tal retirada o recuperación.

52. Señale que opción no es correcta, en relación a los supuestos en los que la competencia sobre las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de los productos corresponde a la Administración del Estado:

- a) Cuando ante un mismo riesgo grave, las medidas adoptadas o previstas por las distintas comunidades autónomas resulten divergentes.
- b) Cuando sólo se pueda hacer frente de manera apropiada a un riesgo grave para la salud y seguridad de los consumidores, adoptando medidas aplicables en el ámbito estatal, aunque únicamente se hubiera manifestado en el territorio de una comunidad autónoma.
- c) Cuando exista un requerimiento a los Estados Miembros, por parte de la Comisión ante un riesgo al que no pudiera hacerse frente en el marco de otros procedimientos previstos.
- d) En ningún caso dado que las competencias están asignadas a la Comunidades Autónomas, el estado actuará como órgano de coordinación y cooperación.

53. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto al Centro Nacional de Alimentación (CNA)?:

- a) Debe estar acreditado según la norma UNE-EN ISO/IEC17025 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de ensayos en productos agroalimentarios.
- b) Coordina y administra la base de datos de Laboratorios de la Red de Laboratorios de Seguridad Alimentaria (RELSA), como respuesta al objetivo indicado en La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
- c) Ejerce tareas como laboratorio nacional de referencia por lo que la participación en la realización de estudios de prospección la deja en las Comunidades Autónomas.
- d) Participa además en la realización de análisis dirimentes y en actividades de formación dirigidos a laboratorios de control oficial nacionales de terceros países.

54. La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma no autorizada legalmente, de las muestras depositadas reglamentariamente, o de las mercancías decomisadas o sujetas a medidas provisionales por las autoridades competentes, se calificarán como:

- a) Graves exclusivamente.
- b) Graves o muy graves, en todo caso.
- c) Muy graves en todo caso.
- d) Graves o muy graves en los casos en que la negativa a facilitar información sea absoluta.

55. Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves, al amparo de Ley 11/1998, de 9 de julio, prescribirán:

- a) A los 3 años.
- b) A los 5 años.
- c) A los 4 años.
- d) A los 2 años.

56. Si el escrito de iniciación de un expediente se hubiera formulado por dos o más interesados:

- a) El desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado.
- b) El desistimiento afectará a todos los interesados, pero la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
- c) La renuncia afectará a todos los interesados, pero el desistimiento sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado
- d) Ninguna opción es correcta.

57. El plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento que asiste al consumidor y usuario será de:

- a) 12 meses desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato si el empresario ha cumplido con el deber de información y documentación del derecho.
- b) Mínimo de 14 días naturales desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato si el empresario ha cumplido con el deber de información y documentación del derecho a desistir.
- c) Máximo de 14 días naturales, si el empresario no ha cumplido con el deber de información y documentación del derecho a desistir
- d) Máximo de 3 meses, como regla general.

58. Son cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario:

- a) La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de compensación de créditos, retención o consignación.



- b) Las que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato, aun cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.
- c) La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.
- d) La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido o das las anteriores son cláusulas abusivas.

59. En virtud del artículo 143 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la prescripción de la acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en el Capítulo IV “Garantía Comercial Adicional, Obligaciones de Documentación y Servicios Posventa” será:

- a) 1 año a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio.
- b) 3 años a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio.
- c) 6 meses a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio.
- d) No prescribe.

60. No es causa de exoneración de la responsabilidad del productor en los daños causados por productos defectuosos si prueba:

- a) Que no había puesto en circulación el producto.
- b) Que el producto no había sido fabricado para su venta.
- c) Que el producto se elaboró según un prototipo aprobado.
- d) Que el producto se elaboró según la normativa existente.

61. Según lo establecido en la Ley 3/1991, de 10 enero, Ley de Competencia Desleal, no se consideran actos de competencia desleal:

- a) Los actos de confusión.
- b) Los actos de comparación.
- c) Las ventas a pérdidas.
- d) Cualquier tipo de publicidad engañosa dirigida a consumidores o usuarios.

62. En las infracciones muy graves, señale que opción no podrá acumularse como sanción al amparo de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos:

- a) La prohibición de recibir financiación pública por un período entre uno y cinco años.
- b) El cierre temporal total o parcial, del centro o servicio por un tiempo máximo de un año.
- c) La Incautación de los bienes directamente relacionados con los hechos que hayan dado lugar al procedimiento.
- d) El cierre definitivo, total o parcial, del centro o servicio.

63. La acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas y falsas es un tipo de:

- a) Acción de cesación.
- b) Acción contra la competencia desleal.
- c) Motivo para iniciar una acción de cesación.
- d) Solicitud de la retirada de la publicidad considerada engañosa.

64. Cuando un consumidor ingresa efectivo en una cuenta de pagos de un proveedor de servicios, podrá disponer del importe ingresado:

- a) Al día siguiente natural al que haya realizado el ingreso.
- b) Al día siguiente hábil al que tenga lugar el ingreso.
- c) Desde el mismo momento en que tenga lugar la recepción de los fondos en la cuenta si existe coincidencia con la moneda de pago de la misma
- d) Desde el mismo momento en que tenga lugar la recepción de los fondos, aun habiendo conversión en la moneda de la cuenta

65. A tenor de lo establecido en Ley 16/2011, de 24 junio, en el caso de liquidación por ineficacia o resolución del contrato de adquisición:

- a) El empresario o a quien sea imputable la nulidad del contrato debe devolver una cantidad igual al desembolso iniciar.
- b) El empresario o a quien sea imputable la nulidad del contrato, debe devolver una cantidad igual al 10% del importe de plazos pagados como indemnización.



c) El empresario o a quien sea imputable la nulidad del contrato, debe devolver una cantidad igual al 10% del precio total del bien objeto de transacción.

d) El empresario o a quien sea imputable la nulidad del contrato debe devolver una cantidad igual al 10% de la tasa anual por los años transcurridos.

66. El consumidor o usuario podrá desistir del contrato de venta a plazos cuando:

a) Esté contemplado dicho desistimiento en el clausulado del contrato.

b) Haya recibido el bien y verificado su funcionamiento en el plazo de 10 días hábiles.

c) El embalaje esté en perfecto estado o no.

d) Lo haga en los siete días hábiles siguientes a la entrega del bien.

67. Se consideran grandes establecimientos comerciales minoristas, los establecimientos individuales o colectivos dedicados al comercio al por menor de cualquier clase de artículos, que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público, superior a:

a) 2.500 metros cuadrados en los municipios con más de 25.000 habitantes.

b) 2.000 metros cuadrados en los municipios con una población de entre 15.000 y 25.000 habitantes.

c) 1.500 metros cuadrados en los municipios con menos de 15.000 habitantes.

d) Ninguna de las tres opciones anteriores; todas son falsas al no ser correctos los metros cuadrados.

68. Los Ayuntamientos para los empresarios que, radicados en el municipio, y no perteneciendo al sector comercio, pretendan ejercer la actividad o comercializar los artículos por ellos producidos o fabricados podrán reservar:

a) Hasta un 20 por 100 del número total de puestos del mercadillo.

b) Hasta un 15 por 100 del número total de puestos del mercadillo.

c) Hasta un 10 por 100 del número total de puestos del mercadillo.

d) Hasta un 5 por 100 del número total de puestos del mercadillo.

69. A los prestadores de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico se les pueden interponer por la comisión de infracciones las siguientes sanciones:

- a) Multa de 150.001 hasta 600.000 euros, para infracciones muy graves.
- b) Multa de 50.001 hasta 150.000 euros, para infracciones graves.
- c) Multa de hasta 50.000 euros, para infracciones leves.
- d) Ninguna; todas las respuestas anteriores son falsas.

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la legislación aplicable en el ámbito alimentario español?

- a) Existen normas de calidad que establecen requisitos y condiciones específicas para determinados alimentos.
- b) Las reglamentaciones técnico sanitarias y normas de calidad complementan a las normas alimentarias Nacionales y Europeas.
- c) Las normas de calidad son normas diferentes a las que regulan a las “Denominaciones de Origen” e “Indicaciones Geográficas Protegidas”.
- d) Las normas de calidad se aplican a los alimentos que usan en su elaboración métodos de producción, transformación o composición que se corresponden con la práctica tradicional aplicable a los mismos.

71. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el Reglamento 625/2017, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre control oficial de alimentos es incorrecta?:

- a) Unifica la legislación de control alimentario.
- b) Establece las tasas por inspección que se deben abonar.
- c) Armoniza los procedimientos y planes de control en toda la UE.
- d) Establece las obligaciones en materia de seguridad alimentaria para las empresas alimentarias.

72. En cuanto a la normalización de frutas y hortalizas se refiere ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta?:

- a) Cuando el tenedor pueda demostrar que las frutas y hortalizas cumplen cualquier norma aplicable adoptada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU), el producto se considerará conforme a la norma general de comercialización.



Comunidad
de Madrid

- b) En términos generales se permitirá en cada lote una tolerancia del 10 %, en número o en peso, de productos que no satisfagan los requisitos mínimos de calidad (salvo que presenten podredumbre u otro deterioro que los haga no aptos para el consumo).
- c) La indicación del nombre y país de origen de las frutas y hortalizas, es obligatoria en el etiquetado y presentación al consumidor, siendo voluntaria en las facturas y documentos de acompañamiento de venta a minoristas.
- d) En la venta al por menor, el minorista debe exhibir de manera clara y legible las menciones particulares relativas al país de origen y, según proceda, la categoría y la variedad o el tipo comercial de tal forma que no induzca a error al consumidor.

73 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid no es correcta?:

- a) Garantiza su imparcialidad al financiarse por las subvenciones y partidas que la Comunidad de Madrid aplica cada año, nunca por cantidades aportadas por los operadores que se sometan a su sistema de control.
- b) Se creó en el año 1996 como un órgano desconcentrado de la Comunidad de Madrid.
- c) Cuenta con un Comité de Calificación encargado de emitir informes sobre la conformidad o no con el régimen de control de los operadores de productos ecológicos.
- d) Se encarga del control de los operadores que elaboren o produzcan alimentos ecológicos en la Comunidad de Madrid, también a los que los importen de terceros países.

74 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la Norma General de Etiquetado de Productos Industriales es incorrecta?:

- a) Excluye, entre otros, a los productos artesanos y a los productos considerados como obras de arte o antigüedades.
- b) Regula el etiquetado de los productos industriales dispuestos para su venta directa al consumidor, en el mercado interior, tanto envasados como sin envasar, así como su presentación, incluida la forma de exposición y publicidad de los mismos.
- c) Indica que el etiquetado de estos productos deberá indicar el lugar de procedencia u origen, en el caso de que su omisión pudiera inducir a error al consumidor.
- d) La vigilancia e inspección de los productos del Reglamento de etiquetado de productos industriales y normas que lo desarrollan, se llevará a cabo tanto en establecimientos de fabricación como en los lugares de venta al consumidor final.

75. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la norma de seguridad y etiquetado de juguetes es incorrecta?:

- a) Los juguetes que puedan resultar peligrosos para los niños menores de 36 meses llevarán además una advertencia, por ejemplo, «No conviene para niños menores de tres años» o un pictograma específico regulado.
- b) Los juguetes no funcionarán con corriente eléctrica cuyo voltaje nominal sea superior a 20 voltios de corriente continua o el voltaje de corriente alterna equivalente.
- c) Los juguetes distribuidos o mezclados con alimentos deberán tener un embalaje propio que tenga unas dimensiones que impidan que pueda tragarse o inhalarse y llevarán la advertencia: “Contiene un juguete.” “Se recomienda la vigilancia de un adulto”.
- d) El Real Decreto no considera juguetes, entre otros, a los rompecabezas de más de 500 piezas y kits de montaje de los modelos a escala detallados.

76 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre las acciones de los diferentes intervinientes para garantizar la seguridad general de los productos industriales es incorrecta?:

- a) Los productores participarán en la vigilancia de la seguridad de los productos, y los distribuidores se encargarán únicamente de cumplir los requisitos de seguridad aplicables durante su almacenamiento, transporte y exposición.
- b) Los órganos administrativos competentes, podrán advertir a los productores y distribuidores que incumplan algunos de los deberes regulados por el Real Decreto sobre seguridad general de los productos de su situación ilegal y; en su caso, requerirles su cumplimiento.
- c) Los distribuidores mantendrán durante 3 años la documentación necesaria para averiguar la identidad de sus proveedores, el origen y, en su caso, el destino, de los productos.
- d) Cuando los productores y los distribuidores sepan o deban saber que un producto suministrado a los consumidores presenta riesgos lo comunicará al órgano competente de la Comunidad Autónoma mediante un formulario tipo.

77. Al amparo de los requisitos de clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas se entiende por gas una sustancia que:

- a) A 50°C tiene una presión de vapor de más de 300 kPa (absolutos) o es completamente gaseosa a 25°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa.
- b) A 45°C tiene una presión de vapor de más de 300 kPa (absolutos) o es completamente gaseosa a 25°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa.



Comunidad
de Madrid

c) A 45°C tiene una presión de vapor de más de 300 kPa (absolutos) o es completamente gaseosa a 20°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa.

d) 50°C tiene una presión de vapor de más de 300 kPa (absolutos) o es completamente gaseosa a 20°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa.

78. En relación al etiquetado de productos textiles, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es incorrecta?:

a) Cuando se comercialice un producto textil que lleve partes no textiles de origen animal, se indicará en el etiquetado o marcado con la mención «contiene partes no textiles de origen animal».

b) Los productos textiles de múltiples componentes (que no sean forros principales y representen menos del 30% del peso total del producto), llevarán una etiquetado o marcado obligatorio con la indicación de su composición en fibras.

c) Las etiquetas o marcados podrán sustituirse o completarse por documentos comerciales que acompañen a dichos productos, cuando estos se suministren a los agentes económicos de la cadena de suministro.

d) Todo producto textil que contenga dos o más componentes textiles con contenidos en fibras textiles diferentes, llevará una etiqueta o un marcado que indique el contenido en fibras textiles de cada componente.

79. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la percepción de cantidades a cuenta del precio, antes o durante la construcción de una vivienda es incorrecta?

a) Los promotores de viviendas deberán contratar un seguro de caución para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido de entrega.

b) El promotor será tomador del seguro de caución siendo el asegurado al adquirente o adquirentes que figuren en el contrato de compraventa.

c) Si la construcción no se inicia o no llega a buen fin en el plazo convenido, el asegurado reclamará directamente al asegurador el abono de la indemnización para la devolución de las cantidades aportadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses.

d) En el momento del otorgamiento del contrato de compraventa, el promotor, hará entrega al adquirente del documento que acredite la garantía, referida e individualizada a las cantidades que han de ser anticipadas a cuenta del precio.

80. Conforme a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar:



- a) Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su terminación.
- b) Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su terminación.
- c) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación.
- d) Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su terminación.

81. Si el empresario no hubiera facilitado al consumidor la información precontractual mencionada en el artículo 9 de la Ley 4/2012, de 6 de julio (aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico) incluidos sus formularios, el plazo vencerá transcurrido:

- a) 3 meses y 14 días naturales a contar desde la celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o el de la recepción posterior de dicho documento.
- b) 3 meses y 14 días hábiles a contar desde la celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o el de la recepción posterior de dicho documento.
- c) 3 meses y 15 días naturales a contar desde la celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o el de la recepción posterior de dicho documento.
- d) 3 meses y 15 días hábiles a contar desde la celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o el de la recepción posterior de dicho documento.

82. Únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento el usuario de este hecho, no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de:

- a) 1 día hábil.
- b) 2 días hábiles.
- c) 3 días hábiles.
- d) 4 días hábiles.

83. La protección de los consumidores en la prestación de servicio de las grúas de vehículos automóviles en la Comunidad de Madrid se regula mediante:

- a) Decreto 36/2003, de 27 de marzo, por el que se regula el derecho a la información y a la protección de los intereses económicos de los consumidores en la prestación de servicios de grúas de vehículos automóviles.
- b) Decreto 151/2001, de 13 de septiembre, por el que se regula la protección de los consumidores en la prestación de servicio de las grúas de vehículos automóviles.
- c) Decreto 36/2003, de 27 de marzo, por el que se regula el servicio de retirada de vehículos de las vías públicas y de vehículos accidentados.
- d) Decreto 151/2001, de 13 de septiembre, por el que se regula el servicio de retirada de vehículos de las vías públicas y de vehículos.

84. En el cartel informativo de los establecimientos mercantiles que oferten vehículos usados deberá indicarse, de manera claramente visible, la vigencia del precio indicado, que será, como mínimo:

- a) De 7 días naturales.
- b) De 10 días naturales.
- c) De 15 días naturales.
- d) De 30 días naturales.

85. Todo usuario está obligado a satisfacer el pago correspondiente a los gastos de almacenamiento de los aparatos de uso doméstico, a partir del plazo de:

- a) 7 días hábiles de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.
- b) 10 días hábiles de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.
- c) 15 días hábiles de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.
- d) Un mes de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.

86. El presupuesto en las prestaciones de servicios a domicilio deberá ser conservado por el prestador del servicio:

- a) Durante un plazo no inferior a 6 meses desde el vencimiento de la garantía.
- b) Durante un plazo no inferior a 6 meses desde la terminación de las prestaciones de servicio.
- c) Durante un plazo no inferior a 1 año desde el vencimiento de la garantía.



d) Durante un plazo no inferior a 1 año desde la terminación de las prestaciones de servicio.

87. Las tintorerías conservarán los resguardos durante un plazo mínimo a contar desde la fecha de entrega de la prenda o prendas por:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.
- d) Seis meses.

88. Conforme a la Ley 9/2013, de 4 de julio, se entenderá que existe acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas, siempre que ninguna de las partes del contrato hubiera expresado a la otra su voluntad en contra antes de que se inicie o debiera haberse iniciado el transporte y:

- a) La cuantía de la controversia no exceda de 10.000 €.
- b) La cuantía de la controversia no exceda de 12.000 €.
- c) La cuantía de la controversia no exceda de 15.000 €.
- d) La cuantía de la controversia no exceda de 18.000 €.

89. Señale la opción incorrecta. El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid lleva a cabo la planificación de la infraestructura del transporte público de viajeros:

- a) Definiendo las directrices de la política a seguir.
- b) Programando las inversiones.
- c) Supervisando los correspondientes proyectos.
- d) Recaudando los ingresos de los títulos combinados que afecten a una empresa.

90. Las Juntas Arbitrales de Transporte tienen excluidas de su función:

- a) La resolución de las controversias de carácter mercantil para el cumplimiento de contratos de transporte terrestre.

- b) Acordar el depósito de mercancías transportadas y, en su caso, enajenarlas, en los supuestos en que así se encuentra previsto.
- c) Resolver las controversias de carácter laboral, penal o tributario.
- d) Realizar las funciones de peritación previstas legalmente.

91. A fin de verificar la correcta medición de los aparatos surtidores, las instalaciones de venta de gasolinas y gasóleos de automoción dispondrán de un recipiente de medida de comprobación de:

- a) 5 litros de capacidad.
- b) 7 litros de capacidad.
- c) 8 litros de capacidad.
- d) 10 litros de capacidad.

92. En el estacionamiento rotatorio el precio se pactará:

- a) Por segundo.
- b) Por minuto.
- c) Por hora.
- d) Por día.

93. La regulación del derecho a la información y la protección de los derechos económicos de los alumnos que cursen enseñanzas no regladas es por:

- a) Decreto 84/2004, de 13 de mayo.
- b) Decreto 147/1998, de 27 de agosto.
- c) Decreto 2/1995, de 19 de enero.
- d) Decreto 151/2001, de 13 de septiembre.

94. El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, no será de aplicación a:

- a) Oficinas de farmacia.

b) Botiquines.

c) Establecimientos de audio-prótesis.

d) Los servicios y unidades técnicas de protección radiológica.

95. El programa de los cursos de formación del personal que realiza las prácticas de tatuaje, micro-pigmentación, perforación cutánea ("piercing") u otras similares de adorno corporal constará de:

a) Parte general (mín. 25 h), Parte específica de tatuajes y micro-pigmentación (mín. 10h), Parte específica de "piercing"(mín. 10h) y Prácticas (mín.5h).

b) Parte general (mín. 20 h), Parte específica de tatuajes y micro-pigmentación (mín. 10h), Parte específica de "piercing"(mín. 10h) y Prácticas (mín. 10h).

c) Parte general (mín. 20 h), Parte específica de tatuajes, micro-pigmentación y "piercing" (mín. 20h), y Prácticas (mín. 20h).

d) Parte general (mín. 20 h), Parte específica de tatuajes, micro-pigmentación y "piercing" (mín. 20h), y Prácticas (mín. 10h).

96. En las agencias de viaje la garantía individual durante el primer año de ejercicio de la actividad, debe cubrir un importe mínimo de:

a) Importe mínimo de 250.000 €.

b) Importe mínimo de 200.000 €.

c) Importe mínimo de 150.000 €.

d) Importe mínimo de 100.000 €.

97. Señale la opción correcta. En caso de infracción turística, podrá imponerse:

a) Multa de cuantía comprendida entre 3.000 € a 50.000 € para infracciones graves.

b) La anulación de inscripción en el Registro de Empresas Turísticas podrá imponerse en el caso de infracciones muy graves exclusivamente.

c) La suspensión o cierre de la actividad empresarial o profesional por un plazo no superior a seis meses el supuesto de infracciones graves.

d) La clausura parcial del establecimiento podrá imponerse en el caso de infracciones muy graves.

98. Los expedientes de reclamaciones formuladas ante los servicios de reclamaciones del Banco de España deberán concluir con un informe en el plazo máximo de:

- a) 1 mes desde la fecha de presentación de la reclamación.
- b) 2 meses desde la fecha de presentación de la reclamación.
- c) 3 meses desde la fecha de presentación de la reclamación.
- d) 4 meses desde la fecha de presentación de la reclamación.

99. De acuerdo con la Ley 50/1980 de 8 de octubre del Contrato de Seguro:

- a) El asegurador puede en el plazo de 2 meses desde el día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato y el tomador dispone de 15 días desde la recepción para aceptarla o no.
- b) El asegurador puede en el plazo de 1 mes desde el día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato y el tomador dispone de 15 días desde la recepción para aceptarla o no.
- c) El asegurador puede en el plazo de 2 meses desde el día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato y el tomador dispone de 10 días desde la recepción para aceptarla o no.
- d) El asegurador puede en el plazo de 1 mes desde el día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato y el tomador dispone de 10 días desde la recepción para aceptarla o no.

100. El competente para resolver las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante el Canal de Isabel II es:

- a) El titular de la Consejería al que esté adscrito el ente público Canal de Isabel II.
- b) El Director General de Comercio y Consumo.
- c) La Presidenta de la Comunidad de Madrid.
- d) El Consejo de Administración del Ente público Canal de Isabel II.